COVID-19 en España

España es ahora un país parado. Desde el 13 marzo, cuando el presidente declaró el estado de alarma, la situación que hemos vivido ha sido del todo surrealista. Aún viendo más de cerca lo que iba a arrasar nuestras calles y comunidades permanecíamos con sensación de incredulidad. El presidente en su primera comparecencia afirmaba que la semana siguiente a la declaración del estado de alarma se alcanzarían casi los 10.000 infectados, y, sin embargo, rozamos los 30.000 positivos. En la tercera semana de confinamiento hemos registrado 10.096 fallecidos, y más de 110.000 infectados.

Las medidas que ha ido tomando el gobierno han sido paulatinas. Se ha prohibido cualquier actividad laboral que no se considere esencial, como lo son las relacionadas con la industria alimentaria, los autónomos, con reducción en sus ingresos, recibirán prestaciones por la falta de actividad, se declaró el cierre de fronteras durante 30 días, se llevó a cabo una inyección de 300 millones de euros para reforzar los servicios sociales, se ampliaron las funciones de las fuerzas armadas... Todas estas se suman a una larga lista de medidas con las que las autoridades pretenden forzar la curva creciente de fallecidos y de contagios hacia abajo.

Desde mi punto de vista las medidas fueron insuficientes y tardías. No se previó la gravedad del asunto. Si las medidas que se tomaron la semana del 16 de marzo se hubiesen tomada dos semanas atrás lo más probable es que se hubiese criticado al gobierno de alarmista. Pero pasadas esas dos semanas, y bajo el panorama mundial, nuestro aplauso a las ocho p.m. se habría dirigido a ellos, los políticos. Es verdad que la particularidad de la situación nos hace cuestionarnos si alguien podría haber previsto algo así. Pero la realidad es que la función de un gobierno es esa, es mirar donde nadie más mira, es prever lo que nadie más prevé, por ello tienen unos poderes y unos medios que los demás les hemos dado en la confianza de su buen uso.

Así pues, creo que lo más importante de esta crisis y de su gestión es la visibilidad de las flaquezas estructurales españolas, europeas y mundiales. Un punto crucial es la deuda pública española que roza casi el 97% del PIB. Esta crisis demuestra la mala gestión de nuestro gobierno que supone una falta de crédito ante los mercados mundiales financieros, lo que nos hace contraer intereses altísimos, casi inasumibles. También da voz a la falta de inversión en I+D+i en el que no invertimos ni el 1,5% de nuestro PIB, siendo así el país europeo que menos invierte. Estas y muchas otras realidades de categoría mundial se ponen en entredicho tras esta crisis, pues es en dichas situaciones críticas donde se pone de manifiesto la consistencia institucional.

Paz Marín, 2º de PPE. Murcia, España